

Jueces chilenos respaldan a sus pares bolivianos destituidos



Comunicado de prensa emitido el 26 de mayo de 2010.-

Asociación Nacional de Magistrados emitió declaración de apoyo por conflicto generado en el vecino país tras destitución de una veintena de vocales de las Cortes Superiores de Justicia.

Su más amplio rechazo a la destitución sufrida por 22 jueces bolivianos manifestó hoy la Asociación Nacional de Magistrados –ente que agrupa a más de 1.200 jueces de todo el país- plegándose a la ola de repudios que han cundido en toda la región tras conocerse la polémica decisión del Consejo de la Judicatura y que derivó en el alejamiento de éstos sin mediar procedimiento alguno y con actos de fuerza en contra de los jueces cesados.

La Asociación Nacional de Magistrados expresó su respaldo a sus pares bolivianos agrupados bajo la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMB) y apeló a su pronta restitución, al tiempo que hizo pública su preocupación por la situación que afecta a ese Poder Judicial, haciendo un llamado a velar por el respeto a la independencia y derechos fundamentales de los jueces destituidos, los que fueron alejados de sus cargos por "asumir sin haber cumplido todos los requisitos y no someterse a exámenes de competencia, como señala la normativa", según se informó.

En una declaración que indica que la Asociación se mantendrá atenta a la evolución de lo ocurrido en Bolivia, el gremio repuso su preocupación por la situación de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien a la fecha se encuentra en prisión preventiva en un penal común tras emitir una resolución en el ejercicio de sus facultades ministeriales y que provocó la ira del gobierno chavista.

Finalmente, los jueces hicieron un llamado a la comunidad jurídica local e internacional a observar la crisis judicial boliviana con atención, puesto que no es el primer impase que viven las judicaturas de la región a manos del poder político en un intento por atentar contra la independencia de éstas, lo que a la larga, según ellos, redundará en una pérdida de garantías para la propia ciudadanía al verse comprometido el Estado de Derecho.